

los redactores de «Poble Andorrà». La idea que había llevado a unos cuantos profesionales de la información a trasladarse a Andorra era otra. Se trataba de hacer posible la aparición del primer diario escrito en lengua catalana desde 1939, difundirlo por Cataluña y el Rosellón francés.

Para empezar, los redactores se encontraron con unos empresarios metidos a jugar a «ciudadano Kane» sin la menor idea de lo que es o debe ser un medio informativo. Para la composición del periódico habían dispuesto de tres linotipias muy viejas, que, sin embargo, tenían la virtud de no estropearse todas al mismo tiempo, y de una máquina plana —nada de rotativa—, que convertía el tiraje de la edición en una labor de agotadora artesanía. Unase a todo ello que la empresa no había reparado en la ineludible necesidad de contar con suficientes teletipos —la información de France Press era recogida cada media hora por un motorista que tenía que desplazarse hasta la emisora local Sud Radio, la agencia Cifra dejó de recibirse tras los primeros números y Europa Press, contratada a última hora, llegaba entre ocho y nueve de la noche en un taxi procedente de Barcelona— y que la plantilla de Redacción era más que insuficiente, con sólo dos periodistas titulados, Armengol y Bastardes, y se comprenderá el malestar de los profesionales, que para

sacar cada día el diario habían de trabajar jornadas de trece o catorce horas.

El malestar se tradujo en protestas y en la reivindicación concreta de que la empresa pagase las horas extras de las «guardias». Verbalmente, el director, un aparejador que a su vez forma parte del Consejo de Administración, se mostró de acuerdo. El acuerdo no se tradujo en la práctica y los redactores decidieron no hacer más horas extras. El despido fue fulminante.

Posteriormente, y saliendo al paso de las informaciones publicadas sobre el caso en Barcelona, la empresa replicó con una nota donde, entre otras cosas, se acusaba a los redactores despedidos de «falta de profesionalidad». Es la cantinela de siempre cuando los periodistas dejan de ser los instrumentos que suplen la incapacidad manifiesta de una empresa y deciden con firmeza poner en orden sus derechos laborales. La falta de medios, fruto de la estrecha visión empresarial, debe ser corregida con la «buena voluntad» de los periodistas.

Solidarizándose con los despedidos, algunos colaboradores y corresponsales han roto sus relaciones con «Poble Andorrà». La crisis, sin embargo, no ha llegado al río. Parece ser que se han contratado nuevos redactores y que, por el momento, el «diario más joven de Europa» sigue adelante. ■ JUAN ZAMORA TERRES.

MORATALAZ

El plante de los pequeños comerciantes

«Los comerciantes de Moratalaz debemos unirnos con el propósito de congelar los elevados aumentos de renta que nos imponen los contratos con Urbis», dijo uno de los asistentes a la reunión que se celebraba en el Centro Cultural de Moratalaz. Se habían reunido unos cien pequeños comerciantes del barrio para estudiar el problema de los progresivos aumentos de

renta de sus locales de negocio calculado sobre la base del aumento de los índices del coste de vida.

Según se afirmó en la reunión, se vienen pagando en Moratalaz unas 330 pesetas por metro cuadrado de alquiler de tiendas y locales, y cada dos años, la Inmobiliaria Urbis, propietaria del barrio, procede a una «actualización» de las rentas. Uno de los intervinientes explicó que, debido a la re-

cesión económica, se estaba produciendo un número alarmante de cierres de negocios y que «si las cosas continúan así, dentro de algún tiempo no quedará ningún comerciante en este barrio».

Había convocado la reunión la Junta de Vecinos de Moratalaz, que, se sabe, desarrolla una gran actividad en el barrio en otros muchos aspectos, tales como el de la enseñanza, el de los espacios verdes, etcétera. Para dentro de unos días, la Junta de Vecinos ha convocado una asamblea general del barrio para tratar de la carestía de la vida. La convocatoria de la reunión de comerciantes por parte de la Asociación de Vecinos responde no sólo a la defensa de las justas reivindicaciones de los vecinos de Moratalaz que son comerciantes, sino también a la preocupación que la Junta tiene por el bienestar de los habitantes del barrio, ya que los aumentos de renta impuestos por Urbis a los comercios repercuten necesariamente en los precios generales.

En la reunión se discutió especialmente las medidas que los comerciantes debían tomar unánimemente para oponerse a estos aumentos de renta, que si bien son legales con arreglo a los contratos suscritos, pueden resultar abusivos teniendo en cuenta las actuales circunstancias económicas. El asesor jurídico de la Junta expuso las posibles vías legales para llegar a una congelación de los aumentos, y tras su informe técnico, se decidió que los 400 comerciantes que hay aproximadamente en Moratalaz debían proceder colectivamente y dar poderes al procurador para iniciar el procedimiento que condujera al acto de conciliación con Urbis. Algunos de los presentes se manifestaron partidarios de que una comisión de los comerciantes negociara directamente con la empresa. En otros sectores se escuchaban voces de «¡Eso, huelga!», «Por las buenas, nada», «Estamos con la soga al cuello, pero no vamos a pedir favores».

Se procedió a nombrar una comisión formada por delegados de los distintos polígonos, con el fin de ini-

ciar las gestiones tendientes a lograr la suspensión de estas cláusulas de actualización de rentas que tanto repercuten en el coste de la vida. Al final de la reunión tomó la palabra el representante de la Asociación de Pequeños Comerciantes de Madrid, que viene funcionando en la calle de Joaquín

García Morato, 62, para ofrecer a los comerciantes de Moratalaz los servicios jurídicos y de solidaridad que la Asociación viene prestando. La reunión fue una de las primeras manifestaciones organizadas en Madrid para la supervivencia de los pequeños comerciantes. ■

MALLORCA

Blas Piñar dio el mitin

Parecía que los aires aperturistas iban a renovar la atmósfera enrarecida del Consejo Provincial del Movimiento, tantos años con las puertas y ventanas cerradas, o, a lo sumo, entornadas, para impedir la entrada de los espíritus malignos de la libertad y el liberalismo. Lorenzo Oliver, nuevo subjefe provincial, al tomar posesión de su cargo, dijo que la guerra está superada, que no hay que hablar ni de rojos ni de azules, y que abriría las puertas del viejo caserón en que se halla el Consejo Provincial para que entrara el aire fresco, y que, si fuera necesario, derribaría puertas y ventanas. El nuevo subjefe quiere vencer convenciendo; reconoce que el organismo no ha tenido el espíritu de apertura que él quiere darle, que las posturas extremas no van con él, que, dentro del falangismo, su lugar está en el centro, y, sobre todo, que su máxima dificultad estriba en saber hasta dónde podrá llegar.

¿Que hasta dónde puede llegar? El primer aviso no se hizo esperar. El joven delfín del Movimiento —procedente del Frente de

Juventudes— presidió el Pleno del Consejo Local de Palma, cuyo jefe está más en la línea ortodoxa, en el transcurso de cuya sesión se hizo la siguiente propuesta: «El Movimiento-organización no debe, en lo sucesivo, organizar actos de signo falangista, tales como conmemoraciones de fundación o muerte de José Antonio, y sí, en cambio, celebrar el 18 de Julio o el Decreto de Unificación».

En Alcalá, 44, esta primera corriente de aire no sentó nada bien, y el hilo directo funcionó de inmediato. Parece que se aconsejó al subjefe que entornara un poco puertas y ventanas, y que hubo reprimenda telefónica, que las palabras se las lleva el viento.

El jefe provincial ha desautorizado algunos actos culturales, como mesas redondas, conferencias o coloquios, y recientemente, Ignacio Camuñas no pudo clausurar el ciclo que había organizado el Ateneo de Mahón, en cuyo último acto había actuado Luis González Seara.

En su lugar se celebró un coloquio público, y el diario mahonés «Menorca», que informaba a sus lectores de



Blas Piñar y el gobernador civil, conversando. A la izquierda, el subjefe provincial del Movimiento.